

otorga la Constitucion federal en su artículo 16. Vistas las constancias de autos y atenta la sentencia del Juez de Distrito que concedió el amparo pedido, por cuanto á que resulta justificado, que el Gefe político de Acatlan previno á Narvaez que para poder permanecer en el Distrito acreditara su honradez, prevencion que no descansando en ley, carece del fundamento debido y constituye la violacion reclamada.

Por las razones expuestas, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: Se confirma la sentencia que pronunció el referido Juez de Distrito de Puebla á 7 de Setiembre próximo pasado, declarando: que la Justicia de la Union ampara y protege á Isaac Narvaez, contra lo dispuesto por el Gefe político del Distrito de Acatlan, sobre que se separara de la demarcacion de este lugar, de no acreditar su buena conducta.

Devuélvanselas actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José Garcia Ramirez.*—*Luis Maria Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 24 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por el C. Buenaventura Valdovinos, como apoderado jurídico de los vecinos de San Felipe y Santiago, en jurisdiccion de Zitácuaro, contra la Orden fecha 15 de Abril último, dictada por el Gobernador del referido Estado, por violacion de garantías.*

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Morelia, 19 de Agosto de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Buenaventura Valdovinos, en representacion de la comunidad de indigenas del pueblo de San Felipe y Santiago del Distrito de Zitácuaro, quejándose de la providencia que contiene el oficio de 15 de Abril último de la secretaría del Gobierno del Estado, que aprobó las bases convenidas entre los individuos del barrio de San Cristobal para dividirse los terrenos de su propiedad, creyendo con esto violada en sus personas la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitucion general. Visto el informe con justificacion rendido por el C. Gobernador del Estado; lo alegado por la parte del estado pueblo; lo pedido por el C. Promotor y la citacion para sentencia.

Considerando: que el fundamento de la queja, es el que la referida Orden de 15 de Abril atacó la propiedad de los terrenos de los indigenas del pueblo de San Felipe, por que en los repartidos á los del barrio de San Cristobal se comprendieron algunos de los pertenecientes al primero; y disponerse ademas en dicha providencia, la creccion en pueblo del referido barrio, dotándolo con el fundo legal respectivo.

Considerando: que la primera parte de este fundamento no ha sido probada por el quejoso, y al contrario, del informe justificado del Gobierno aparece probado que las

bases establecidas para el reparto, lo fueron por los mismos indígenas del barrio de San Cristobal, y de los terrenos de su propiedad sin comprender en dicho reparto los de dominio ajeno: que las bases citadas llegaron á conocimiento de los indígenas de San Felipe, quienes le prestaron su tácita aprobacion por medio de su representante, como consta del documento de fojas 14.

Considerando en fin: que la segunda parte del fundamento de la queja no es cierta, pues la providencia del Gobierno del Estado se limita á establecer, que cuando se verifique la ereccion en pueblo del barrio de San Cristobal, se haga conforme á las leyes del Estado, y entre ellas la prevencion 16 del Reglamento de la de 13 de Diciembre de 1851, por cuyas razones se viene desde luego en conocimiento, que los actos del Ejecutivo del Estado, se han verificado dentro de la órbita de sus facultades y sin atacar los derechos de tercero ni menos la garantía invocada.

Por lo expuesto, y con fundamento del artículo 101 de la Constitucion general, y de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Buenaventura Valdovinos, por no haberse violado en las personas de sus representados, la garantía del artículo 16 del Código fundamental. Hágase saber; publíquese en los periódicos oficiales general y del Estado; remítase copia al Semanario Judicial y las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

Lo decretó definitivamente juzgando, el C. Juez de Distrito del Estado de Michoacan. Doy fé.—*Gabino Ortiz*.—Una rúbrica.—Ante mí.—*Isidro Aleman*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Agosto 5 de 1873.—*Isidro Aleman*, secretario.

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Setiembre 23 de 1873.—Visto el recurso de amparo que en 4 de Julio TOMO V.—PARTE II.

de este año promovió ante el Juez de Distrito del Estado de Michoacan el C. Buenaventura Valdovinos, como apoderado jurídico de los vecinos de San Felipe Santiago, en jurisdiccion de Zitácuaro, contra la órden fecha 15 de Abril último dictada por el Gobernador del referido Estado, por la cual aprobó las bases convenidas entre los vecinos del barrio de San Cristobal, para dividirse los terrenos de su propiedad, y para que al constituirse en pueblo tuviesen el respectivo fundo legal; con cuya órden cree el representante de los vecinos de San Felipe, que se ha violado en las personas de sus representados la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitucion federal.

Vistas las constancias de autos y atenta la sentencia del Juez de Distrito, en la cual deniega el amparo pedido, por cuanto á que los fundamentos de la queja, á saber: que la órden reclamada ataca la propiedad de los vecinos del pueblo de San Felipe, porque en los terrenos repartidos á los del barrio de San Cristobal, se comprendieron algunos de los de aquel pueblo, y disponerse en dicha órden la ereccion en pueblo de dicho barrio, dotándolo ilegalmente con el fundo indicado, no han sido probados esos fundamentos, y antes bien aparece que las bases aprobadas por el Gobernador se habian convenido con los quejosos de San Felipe.

Por las razones expuestas, que demuestran no haber violado el Gobernador de Michoacan la garantía invocada por el apoderado Valdovinos, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: se confirma la sentencia que pronunció en Morelia el Juez de Distrito del Estado de Michoacan á 19 de Agosto último, declarando: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Buenaventura Valdovinos, por no haberse violado en las personas de sus representados la garantía del artículo 16 del Código fundamental.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompa-

hándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 15 de Octubre de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de México por D. Juan Vega y Alvarez, en representacion de la Señora Dª Josefa Iradi de Alegre, contra el acuerdo del Ayuntamiento de esta capital, en virtud del cual la Administracion de Rentas Municipal, usando de la facultad económico-coactiva, embargó la parte de la hacienda de Aragon, que posee y tiene como propia dicha Señora Iradi.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor dice: que habiendo el Juzgado conformádose con el pedimento anterior, mandó continuar el juicio de amparo sustanciándose en lo principal. Pedido el informe de la ley al C. Presidente del Ayuntamiento, lo ha rendido á su nombre el C. Abogado defensor de Beneficencia; reproduciendo el que antes produjo al tratarse el punto de la suspension, acompa-

ñando copias de lo adeudo por réditos hasta el año de 1868, de los diversos acuerdos del Gobierno del Distrito relativos á la transaccion, y del estenso dictámen que presentó á la junta de hacienda del Ayuntamiento el mes de Abril último, impugnando las propuestas de la Señora Carrillo para el pago de réditos, y para fraccionar la hacienda de Aragon dividiéndola en lotes. En el presente juicio de amparo, se agitan diversas cuestiones legales que pueden deducirse en vía de amparo, y al Juzgado sin preocuparlas, solo toca resolver si existe ó no la violacion de los artículos 16 y 17 de la Constitucion que han sido invocados por el quejoso.

Es un hecho que el fondo de parcialidades primitivamente y hoy la corporacion municipal, tiene derecho á los capitales que á aquel pertenecian, y en consecuencia la habilidad para cobrar réditos, y esta no la niegan ni la Señora Carrillo, ni el Señor Vega en representacion de la Señora Alegre, supuesto que la queja únicamente es, que el Ayuntamiento ejercita en su contra el uso de la facultad económico-coactiva no siendo su deudora: lo será ó no segun se declare subsistente ó insubsistente la transaccion aprobada por el Ayuntamiento el mes de Abril de 1871; mas su validez como dije antes, no puede ventilarse en el presente juicio, y se resolverá, ó por los tribunales del fuero comun en el que corresponda, ó en el que se tenga al contenderse sobre el embargo practicado por el Ayuntamiento en uso de la facultad económico-coactiva. La ley de 20 de Enero de 1837 que determina el uso de esta facultad, previene: que practicado el embargo, habiendo oposicion, se remita el expediente al Juzgado de Distrito, para que ante él continuen los procedimientos; pues bien, practicado este por el Ayuntamiento, ha concluido en el caso, y toca al Juzgado continuar las diligencias.

Por lo expuesto, existiendo la violacion de las garantías reclamadas en el sentido